

José Antonio Errejón

El conflicto político en la España actual

Enero de 2024.

El conflicto político, en la memoria histórica subyacente de nuestro pueblo, ha estado asociado a la idea de guerra, a la tragedia experimentada durante generaciones por miles de familias a partir del golpe de Estado del general Franco, la guerra y la posterior dictadura terrorista.

Haber alcanzado los niveles más elevados en los procesos de autodeterminación social en la experiencia de los años treinta ha sido pagado con creces por nuestro pueblo, al que las oligarquías nunca han perdonado su atrevimiento, condenándole a un estado de vigilancia y represión permanente.

Durante décadas, incluso ya en tiempo de la democracia, la frase atribuida a Franco - "haga Ud como yo; no se meta en política"- ha constituido el núcleo del sentido común, especialmente entre las familias procedentes del bando republicano, que vieron la política como fuente de desgracias sin límite. Ello explica un cierto apoliticismo entre las capas populares que se ha visto repetido en nuestros días, sobre todo en momentos críticos en los que las derechas han agitado de manera sutil, el fantasma de la guerra.

Tal situación ha generado una cierta minoría de edad en estas capas que ven el conflicto como el preludio de la tragedia. Sin embargo, el conflicto y la lucha por el poder son inherentes a las sociedades complejas de nuestro tiempo y la democracia su normalización.

La hegemónica ideología neoliberal, responsable de la ruptura de los vínculos sociales, de la insolidaridad y el *sálvese quien pueda*, ha conseguido presentar la lucha contra estos procesos devastadores como un riesgo para la convivencia tildando con frecuencia a quienes la practican de terroristas o totalitarios.

Junto a lo anterior, el déficit de prestaciones sociales y servicios públicos ha aumentado la desesperanza en las capas más indefensas de la sociedad presas del resentimiento y el miedo y presas fáciles de los discursos del odio y la venganza.

La quiebra de los pactos del 78. El equilibrio del 78 fue posible entre una acomplejada derecha heredera del franquismo y una izquierda con una amplia base social y con el viento de la renovación sobre sus velas. Desde entonces, la derecha ha perdido sus complejos de heredera de la dictadura, animada por los cuarenta años de neoliberalismo, y la izquierda tiene agotado su repertorio de propuestas tras la desaparición del Estado del Bienestar y, sobre todo, de las condiciones que lo hicieron posible.

El acuerdo del 78 ya no le vale a la derecha aunque lo invoque retóricamente para oponerse a las políticas de los gobiernos progresistas que pretenden recuperarlo en materia de derechos sociales, de negociación colectiva, de pensiones, etc.

La posibilidad de alcanzar un acuerdo similar al del 78 es, entonces, reducida por las siguientes razones:1) En el 78 había un horizonte compartido de modernidad que se identificaba con la entrada en Europa. Es difícil encontrar hoy un objetivo equivalente para la derecha y la izquierda; 2) Ha desaparecido la ilusión colectiva que para las

generaciones jóvenes de los 70 pudo suponer la democracia y las libertades sin ser sustituidas por ninguna otra; 3) Buena parte de la sociedad actual no conoce el miedo a la guerra que durante décadas atenazó a la sociedad española, llevándola a aceptar la ausencia de libertad a cambio de la paz y el bienestar.

En consecuencia con lo anterior, el nuevo acuerdo social que sustituya al del 78 deberá ser construido desde abajo, en la vida social cotidiana. Y no será UN Acuerdo Social sino una dinámica de acuerdos sociales, estructurados según las reglas institucionalmente consagradas al efecto. Impulsar una dinámica y una antropología cultural del ACUERDO y el DIÁLOGO como formas de convivencia social: esa será la auténtica revolución de nuestro tiempo.

El sistema político de partidos en España se ha alterado significativamente pero se sigue estructurando en torno a los dos ejes históricos de conflicto y que a su vez constituyen los dos pilares del 78, las cuestiones social y territorial.

El problema social, la pobreza, la exclusión social, la desigualdad creciente, la ausencia de posibilidades de emancipación para los más jóvenes, la merma de los derechos sociales, etc.- se expresa hoy como la pelea por la democracia (?).

Los sectores pudientes pretenden recortarla al mínimo dejando las decisiones fundamentales que afectan a la colectividad en manos de los “saberes expertos” y sustituyendo los derechos sociales, como título habilitante para acceder a prestaciones públicas, por la solvencia para proveerse de ellas en el mercado.

En la dimensión territorial el conflicto se expresa u opone la defensa de la unidad nacional y del Estado frente a la defensa de los “particularismos” que la niegan (las aspiraciones de autogobierno territorial, los derechos sociales y políticos, etc.); en términos más abstractos, el Estado UNO contra la multiplicidad de personas, comunidades e identidades.

Esta pretensión de conseguir el gran UNO es, la experiencia del siglo XX lo demuestra, el germen del totalitarismo. Ninguna “esencia” nacional nos ha juntado, convivimos por circunstancias históricas diversas entre las cuales han tenido gran peso la voluntad de minorías dominantes de encerrar a una población determinada en un territorio bajo la soberanía de un Estado y a eso le hemos llamado nación. El mito del acuerdo fundacional tiene escaso o nulo fundamento histórico; ha sido después, cuando la minoría social vencedora en el conflicto ha entendido que la tregua con la mayoría vencida aseguraba mejor su dominio, cuando se ha consagrado en la constitución este acuerdo social.

La democracia, por el contrario, parte del reconocimiento de la esencial diversidad y la ausencia de transcendencia alguna fundadora del orden político. Y, junto a estos rasgos, el no menos esencial del conflicto como inherente a la vida en sociedad. Estos tres rasgos llevan a algunos a postular la radical incompatibilidad del Estado con la democracia.

Pero los poderosos no parecen conformarse con esta diversidad. Exigen ordenamientos que uniformicen a la población, mercados unificados sin restricciones y lo más desfiscalizados posibles y, sobre todo, minimización de los derechos e instituciones sociales que estorban a la colonización absoluta de la vida social por el negocio privado y la mercancía.

La mayoría de la población trabajadora y subalterna necesita todos esos derechos e instituciones pero carece de la determinación y la organización para luchar por ellos. Por lo demás, estas dotaciones (de determinación y organización) no se improvisan y difícilmente encuentran hueco en las vidas de las capas subalternas, absorbidas como están por el esfuerzo por sobrevivir y salir adelante.

En esto, también, la antropología capitalista ha vencido sin paliativos a las rancias propuestas de la izquierda política y sindical para “organizar” el tiempo libre. La participación popular organizada por el mercado es incomparablemente más atractiva que la que se les ocurre a las izquierdas, habitualmente propuestas de carácter moralizante y tendentes al sermón.

La organización de la pluralidad política que la Constitución encarga a los partidos políticos se cumple, pues, desigualmente. Los partidos de la derecha la realizan a través de los aparatos de producción de subjetividad y creación de sentido de las sociedades capitalistas, con resultados bastante exitosos. Cuentan a su favor con el atractivo de los grandes espectáculos populares, en general en manos de empresarios con posiciones inequívocamente conservadoras. Así que para organizar la subjetividad de derechas no es necesario que los partidos lo hagan, todo el “tiempo libre y de ocio” es fecundo en sembrar valores conservadores e insolidarios.

La cultura de izquierda, salvo los conciertos para jóvenes de hace años, recuperados por empresas comerciales, no ha conseguido participaciones sociales similares.

Las formas de vida predisponen, obviamente, a abrazar unos u otros valores. En el capitalismo industrial clásico, la ciudad era capaz de albergar culturas distintas porque frente a la dominante cultura burguesa, los fuertes lazos de comunidad proletaria impregnaba rasgos fuertes de subjetividad que predisponían a un tipo de comportamiento político, en general ligado a valores de cooperación y apoyo mutuo, socialistas.

Con el *info* y el *neurocapitalismo* la vida individual y colectiva de las masas ha sido convertida en objeto de próspero negocio y por tanto colonizada para una incesante actividad escasamente compatible con el ejercicio de valores solidarios. En “El nuevo espíritu del capitalismo” Boltanski y Chiapello teorizaron la forma en la que las aspiraciones del 68 habían sido objeto de captura por la industria de creación de sentido y convertidas en vectores de conformación de antropología capitalista de la que la aspiración del *empresario de sí mismo* es solo una de las más expresivas.

La reducción de la política a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación, en un entorno social desmovilizado y devastado por los efectos de la crisis y las políticas austeritarias, ha favorecido esta suerte de escena política autista en la que los debates tiene más que ver con los “problemas de los políticos” y con las en ocasiones delirantes posiciones políticas que sustentan, que con los problemas reales de las mayorías sociales. Cuando la agenda política está configurada en exclusiva por los partidos y los medios de comunicación (con frecuencia en orden inverso), su contenido se escapa hacia terrenos absolutamente alejados de las preocupaciones sociales o bien se convierte en el lodazal de las recíprocas acusaciones de corrupción.

El propio concepto de agenda política expresa un contenido que trae causa de la expropiación del habla y la conversación, de la capacidad de enunciar, de la que son objeto las personas desde la fundación del Estado. A partir de ahora en la esfera pública se hablará solo de “lo que esté en la agenda”; y la formación de la agenda es una de las funciones especializadas del Estado a través de sus diversos aparatos (partidos, medios de comunicación, universidades y centros de investigación, etc.). A través de esta expropiación, los asuntos públicos, los “problemas y demandas sociales” son reconocidos cuando son enunciados como tales por alguna de estas agencias. Pero tan importantes como los contenidos son las exclusiones, las ausencias.

Solo cuando un sector de la población decide que el daño o el agravio que sufre no es solo de su incumbencia sino que afecta al orden mismo de la convivencia y lucha por convertirlo en “público”, solo entonces, la agenda política puede reequilibrarse tomando en consideración otros problemas además de los que preocupan a los poderosos.

Lo hemos visto con el movimiento feminista y con los pensionistas. “No, dicen las mujeres, la violencia machista no es un problema doméstico; constituye una negación de la convivencia en una sociedad de personas libres”. “No, dicen los pensionistas, no aceptaremos vuestras reglas para la reducción del déficit público, razones de su existencia”.

Los partidos políticos no pueden pretender monopolizar la actividad política, básicamente porque “traducen” mal las demandas sociales o, aún peor, las instrumentalizan, amén de que, en su forma actualmente hegemónica como *partido/empresa*, buscan satisfacerlas primando obtener el máximo de rentabilidad electoral al hacerlo. No obstante lo cual contribuyen, junto con los medios de comunicación, a configurar la opinión pública, a articular las demandas ciudadanas, y sirven de referencia y soporte para la acción de gobierno. Su proceso de oligarquización y burocratización, de *empresarialización*, no favorece el desempeño de las funciones que les atribuye la Constitución.

En la democracia están interesados fundamentalmente los sectores sociales que aspiran, con mayor o menor intensidad, a equilibrar en su favor la distribución del poder y la riqueza. Pero este combate, este auténtico conflicto histórico, no enfrenta a la democracia con el liberalismo; la izquierda haría mal renunciando al patrimonio liberal y regalándoselo a la derecha que, en la época neoliberal, lo ha instrumentalizado al servicio de los intereses de las oligarquías.

El peor error que podría cometer la izquierda en España sería aceptar la identificación del liberalismo con el capitalismo, de los valores liberales con el discurso de la derecha.

La sociedad española ha cambiado mucho y la hegemonía neoliberal no ha sido ajena a ello. La izquierda debe mantener su apuesta por la igualdad y la justicia social, pero debe también atender las demandas de singularidad y autonomía individual que emergen de la sociedad y a las que el capitalismo neoliberal ha conseguido convertir en fuentes de prósperos negocios (los sueños del 68, ¿han sido capturados por el neoliberalismo?). Pero eso no puede justificar que las ansias de autonomía personal frente a los grandes aparatos e instituciones de las sociedades actuales sean desdeñadas como expresión de alienación o falsa conciencia.

Es difícil imaginar, en todo caso, la aplicación de los vetustos modelos socialistas a sociedades contemporáneas como la española.